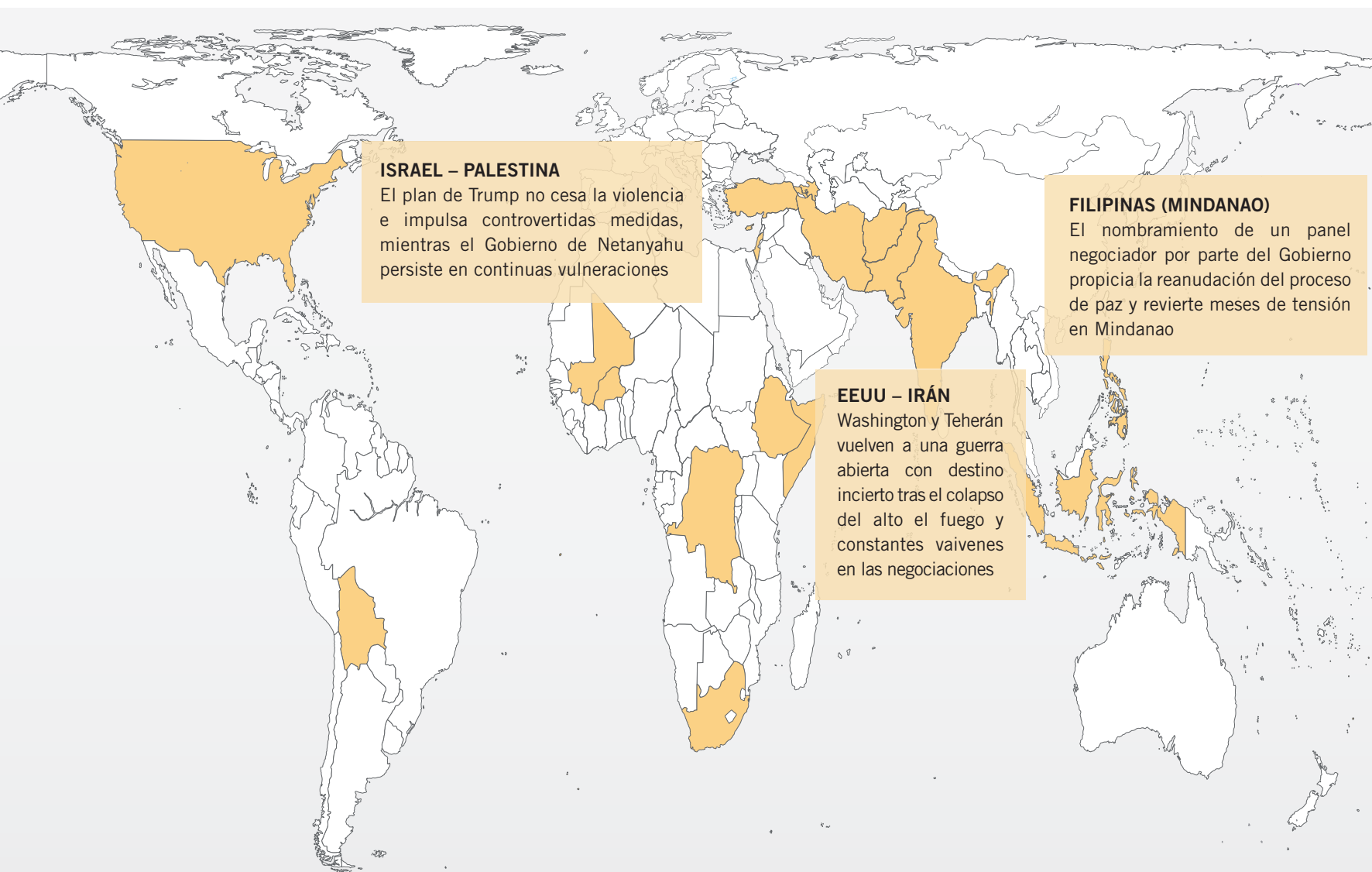


Escenarios de riesgo y oportunidades de paz

Julio de 2026

ecp̃ escola de
cultura de pau

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona



Otros casos analizados en esta edición:

ÁFRICA

Burkina Faso
Etiopía
Malí
RDC
RDC (este)
Somalia
Somalia – Somalilandia
Sudáfrica

AMÉRICA

Bolivia

ASIA Y EL PACÍFICO

Afganistán
Afganistán – Pakistán
India – Pakistán
Indonesia (Papúa Occidental)

EUROPA

Armenia – Azerbaiyán
Türkiye (PKK)

Con el apoyo de:



Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament



Generalitat
de Catalunya

- *Escenarios de riesgo y oportunidades de paz* es una publicación trimestral
- que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la
- agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de
- oportunidad para la construcción de paz. Este número abarca el periodo
- entre abril de 2026 y el 20 de julio de 2026.

Escenarios de riesgo y oportunidades de paz es una publicación trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Es una herramienta analítica que integra la perspectiva de género interseccional y que pretende ser un recurso útil para actores educativos y políticos y la ciudadanía en su conjunto, contribuyendo a la comprensión de estos contextos y a la acción temprana. Este número abarca el periodo entre abril de 2026 y el 20 de julio de 2026.

Casos destacados:

EEUU – IRÁN: Washington y Teherán vuelven a una guerra abierta con destino incierto tras el colapso del alto el fuego y constantes vaivenes en las negociaciones

ISRAEL – PALESTINA: El plan de Trump no cesa la violencia e impulsa controvertidas medidas, mientras el Gobierno de Netanyahu persiste en continuas vulneraciones

FILIPINAS (MINDANAO): El nombramiento de un panel negociador por parte del Gobierno propicia la reanudación del proceso de paz y revierte meses de tensión en Mindanao

Otros casos analizados en esta edición:

ÁFRICA

BURKINA FASO: La Junta Militar intensifica la persecución a la oposición en el país

ETIOPÍA: Creciente fragilidad del acuerdo de paz de la región de Tigré y elecciones bajo tensión

MALÍ: El asedio a Bamako desestabiliza el control del régimen militar

RDC: La epidemia de ébola en el país se convierte en una de las más graves a nivel mundial en medio del conflicto y la crisis humanitaria en el este

RDC (ESTE): La guerra y la crisis multidimensional persisten en el este del país pese a los esfuerzos diplomáticos internacionales

SOMALIA: Estancamiento en el conflicto armado con al-Shabaab y grave crisis electoral

SOMALIA – SOMALILANDIA: Se incrementa la tensión entre Somalia y Somalilandia y en la región, a raíz del reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel

SUDÁFRICA: El país afronta los ataques contra personas migrantes más graves de una década

AMÉRICA

BOLIVIA: Bolivia vive una de las oleadas de movilizaciones antigubernamentales más importantes de los últimos años

ASIA

AFGANISTÁN: La detención de decenas de mujeres desencadena protestas contra el régimen talibán en Herat

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El conflicto entre ambos países corre el riesgo de enquistarse

INDIA – PAKISTÁN: Diplomáticos, políticos y sociedad civil se dirigen a los dos Gobiernos para reclamar el restablecimiento del diálogo y las relaciones bilaterales

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): Se agrava el conflicto en la región indonesia de Papúa Occidental

EUROPA

ARMENIA – AZERBAIYÁN: Nuevos pasos en el acercamiento formal entre los dos países

TÜRKIYE (PKK): Incertidumbre en el proceso negociador



Las hostilidades entre EEUU e Irán han vuelto a tener como uno de sus escenarios principales el Estrecho de Ormuz. Fuente: UN News.

EEUU – IRÁN

Washington y Teherán vuelven a una guerra abierta con destino incierto tras el colapso del alto el fuego y constantes vaivenes en las negociaciones

A cinco meses del ataque de EEUU e Israel contra Irán, la confrontación transita a una nueva fase. Tras el colapso del alto el fuego, Washington y Teherán inician una nueva etapa de guerra abierta de destino incierto y con complejas perspectivas de resolución. A partir de julio, las hostilidades se intensificaron y los intercambios de fuego volvieron a afectar principalmente la zona del Estrecho de Ormuz, Irán y varios países de la región que albergan bases de EEUU. La nueva escalada se produce en un escenario de incertidumbre y confusión sobre la marcha de las negociaciones entre Washington y Teherán, alimentado en parte por las continuas y contradictorias declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump –desde el ataque a Teherán el 28 de febrero Trump ha declarado en más de 40 ocasiones que la guerra estaba a punto de acabar, pero en las últimas semanas había elevado el tono de sus amenazas y advertencias a la república islámica. La deriva hacia una nueva fase de enfrentamiento militar quedó certificada cuando, la segunda semana de julio, Trump envió una carta a los legisladores del Congreso estadounidense notificando formalmente el retorno a la guerra con Irán. En mayo, tras el acuerdo de tregua

alcanzado a principios de abril, el mandatario de EEUU les había notificado el fin de una guerra para la cual no había pedido autorización.

La misiva argumenta la necesidad de “una acción militar coherente” para proteger los intereses del país y abre un periodo de 60 días en los que el Gobierno de EEUU puede utilizar la fuerza sin la luz verde del Capitolio. Según admitió Teherán, solo en julio los ataques estadounidenses habían causado la muerte de 50 personas en Irán y dejado heridas a más de 500 personas. En este contexto, Teherán declaró suspendido el Memorándum de Entendimiento (MOU) entre las partes suscrito el 17 de junio. Al cierre de esta edición, Irán había intensificado sus ataques contra los países aliados de Washington y que albergan bases estadounidenses, incluyendo una ofensiva en la que murieron tres soldados

estadounidenses en Jordania. Este hecho amenazaba con acelerar la escalada de ataques cruzados. La evolución de acontecimientos confirmó la fragilidad del alto el fuego –desde su anuncio, objeto de acusaciones mutuas de vulneración– y puso en evidencia las ambigüedades de origen del MOU.

A partir de julio, las hostilidades entre EEUU e Irán se intensificaron y los intercambios de fuego volvieron a afectar principalmente la zona del estrecho de Ormuz

La disputa por Ormuz

En las primeras semanas de esta nueva fase de hostilidades el foco se ha centrado en el control de Ormuz, un asunto que –como destacan numerosos análisis– **no era un problema ni estaba en disputa antes del ataque de febrero**. El estrecho, por el que circula una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, ha estado bloqueado de manera intermitente desde el inicio de las hostilidades. Tras intensificarse los intercambios de fuego entre EEUU e Irán en julio, Trump anunció que Washington se convertiría en el guardián del paso marítimo y manifestó su intención de cobrar un 20% del valor de la carga transportada a las embarcaciones que utilicen esta vía. El mandatario tuvo que retractarse poco después. En los últimos meses, diversos líderes internacionales habían enfatizado la relevancia de garantizar la libertad de navegación, principio clave de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, y el propio secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, había declarado que el cobro de tasas no era compatible con el derecho internacional. El episodio alentó una vez más las críticas al Gobierno de Trump por falta de visión y **caos estratégico**. Las oscilaciones en los posicionamientos de EEUU junto a los efectos del conflicto en el Estrecho de Ormuz volvieron a elevar el precio de los hidrocarburos y amenazaban con agravar la inflación a escala global.

Algunos análisis han puesto de relieve que las dificultades para abordar la cuestión de Ormuz derivan, en parte, de la imprecisa formulación del Memorándum de Entendimiento, que ha derivado en interpretaciones contrapuestas por las partes y en acusaciones cruzadas de vulnerar los términos del acuerdo. Entre otras cosas, **el documento de 14 puntos del MOU** establece que Irán realizará “los arreglos necesarios, empleando sus mejores esfuerzos, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales” a través de Ormuz “sin coste alguno durante 60 días”. El texto no define en qué consistirán los acuerdos, ni hace referencia a otras medidas para asegurar el estrecho y da la impresión de que Teherán es el actor dominante que tiene la última palabra sobre la situación. El memorándum sí especifica que Irán debe involucrarse en un diálogo con otros Estados del Golfo para definir la administración de esta ruta. Según trascendió, la Organización Internacional Marítima, IMO por sus siglas en inglés, había estado analizando con Irán y Omán –los dos países que comparten el litoral del estrecho– algunos modelos de gestión como los que funcionan en los estrechos de Malaca y Bósforo y Dardanelos.

Al pulso derivado de las imprecisiones del texto se suma que, como enfatizan analistas –entre ellos Rob Malley, ex negociador de EEUU sobre el tema nuclear– **en ambos bandos hay grupos que presionan por asumir el coste de escalar la tensión y volver al escenario de guerra,**

***Tanto en Irán
como en EEUU
hay sectores que
presionan por asumir
el coste de escalar
la tensión y volver al
escenario de guerra***

basándose en cálculos que pueden demostrarse erróneos. Sectores en Irán creen que el retorno a las hostilidades afectará primero a EEUU por el incremento en los precios del petróleo y las repercusiones en los mercados –Trump enfrenta elecciones legislativas en noviembre. Paralelamente, en EEUU, sectores de la administración consideran que Teherán cederá primero a las presiones militares dada la degradación de sus infraestructuras y la merma en sus recursos económicos derivada del conflicto. En esta línea, el colapso del MOU –ya efectivo, inminente o probable, según los análisis– se considera un reflejo de las divisiones en los liderazgos de ambos países y de la imposición de los que defienden la línea dura y confrontacional por sobre de los que apuestan por abordar el conflicto por vías diplomáticas.

Acuerdo cuestionado y el factor Líbano

El MOU ha generado suspicacias y valoraciones críticas desde su anuncio a mediados de junio. Se ha cuestionado la vaguedad de su lenguaje y también que las partes utilizaran el pacto no para profundizar en el abordaje de la disputa a través de negociaciones, sino como una extensión de la guerra por otros medios. En esta línea, International Crisis Group ha subrayado que ambas partes han recurrido a la fuerza militar para imponer su propia interpretación del acuerdo. Una de las debilidades de fondo del pacto en las que más se ha insistido es que no aborda algunos de los temas más acuciantes que, supuestamente, dice tratar. De esta manera, difiere el asunto del programa nuclear iraní –y establece un plazo para llegar a un acuerdo, el 17 de agosto, que todo indica, no se cumplirá– y no aporta claves para resolver asuntos como la gestión de Ormuz, las condiciones para que Teherán acceda a sus fondos bloqueados o la interrelación del conflicto con el que afecta a Líbano. Lo que se pretende presentar como “ambigüedad constructiva” se ha demostrado “destruktiva”, en un contexto de desconfianza profunda entre las partes y predisposición a imponer visiones por la fuerza. Otros elementos del plan han sido considerados como inviables o carentes de credibilidad, como el compromiso de EEUU y sus socios regionales para desarrollar un plan de al menos 300 mil millones de dólares para la reconstrucción y desarrollo económico de Irán.

Sin embargo, junto con Ormuz, uno de los temas más controvertidos del acuerdo ha sido la conexión con la situación en Líbano. Cabe recordar que, en respuesta a los ataques de EEUU e Israel sobre Irán –que acabaron con la muerte de su líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei– la milicia libanesa Hezbollah (aliada de Teherán) lanzó ataques sobre Israel a principios de marzo. A partir de entonces, Israel –que no había cesado los ataques en territorio libanés a pesar del acuerdo de alto el fuego suscrito con la mediación de EEUU y Francia en noviembre de 2024– intensificó su ofensiva aérea y amplió

sus operaciones terrestres en Líbano. En este contexto, el primer punto del MOU estableció que la confrontación cesaría en todos los frentes, incluido en territorio libanés. Desde el punto de vista de Irán, esta cláusula permitía asegurar un papel clave en el fin de la campaña israelí sobre Líbano y el repliegue de las fuerzas de Netanyahu de los territorios que ha ocupado en suelo libanés. El hecho de que en los últimos meses EEUU haya mediado en las negociaciones bilaterales entre Israel y el Gobierno libanés y favoreciera un acuerdo que, en la práctica, permite que se mantenga la ocupación militar israelí en el sur de Líbano ha sido considerada por Teherán como una ruptura del pacto por parte de Washington.

La cuestión libanesa ha sido especialmente compleja porque ha habido varios acuerdos de alto el fuego con condiciones contradictorias entre sí. El primer alto el fuego, el mencionado en el MOU, fue desarrollado en conversaciones en Lucerna (Suiza) en junio en las que participaron como jefes de delegación el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Según estas conversaciones, Irán pasaría a tener un papel más destacado en Líbano –y por consiguiente así también su aliado libanés, Hezbollah– y Teherán se incorporaría a un nuevo mecanismo de prevención y gestión de incidentes. A finales de ese mismo mes, sin embargo, se firmó en Washington un segundo y más amplio alto el fuego fruto de las negociaciones directas entre Israel y el Gobierno libanés mediadas por EEUU –bajo la supervisión del secretario de Estado, Marco Rubio– que revertía la lógica del primer acuerdo, al excluir a Irán y Hezbollah. Adicionalmente, este pacto permite a Israel mantener sus fuerzas en el sur de Líbano hasta el desarme total de Hezbollah y, según advirtieron personas expertas en legislación internacional, puede dificultar la persecución de crímenes de guerra perpetrados por Israel en Líbano. Según la penúltima cláusula del pacto –también de 14 puntos–, las partes se comprometen a “cesar todas las acciones hostiles o negativas en foros políticos o legales internacionales”, disposición que podría dificultar que víctimas de la ofensiva que Israel lanzó sobre Líbano después del 7 de octubre de 2023 puedan buscar rendición de cuentas y justicia en cortes internacionales o que se permita actuar en Líbano a la Corte Penal Internacional. Según datos de la ONU, desde el 2 de marzo y hasta el 20 de junio al menos 4.100 personas habían muerto en Líbano como resultado de los ataques israelíes, mientras que otros tres civiles y 36 soldados israelíes habían muerto en las hostilidades entre Israel y Hezbollah en el mismo período. El conflicto armado entre Irán y EEUU en 2026 también ha causado la muerte de al menos 14 soldados estadounidenses –otros 400 han resultado heridos–, a las que se suman los tres soldados muertos en el ataque iraní en Jordania en julio, y de más de 3.600 personas en Irán, además de decenas de víctimas mortales en otros países de la región.

Perspectivas de futuro

En el MOU Irán y EEUU se habían comprometido a seguir negociando y se habían fijado un plazo de 60 días, extensible si las partes así lo convenían, para alcanzar un acuerdo definitivo. Aunque la puerta de las negociaciones no se ha cerrado total ni formalmente, el marco que se había definido para –en teoría– prevenir una escalada de hostilidades se ha demostrado inefectivo y el nuevo escenario anticipa enormes dificultades e impactos de alcance regional y global. Los ya mencionados impactos en la economía global, en especial por las repercusiones en el sector de hidrocarburos, se estiman en millones. En junio el Global Peace Index 2026 advertía que las pérdidas derivadas de una reanudación del conflicto y un nuevo bloqueo de Ormuz podrían ascender a 3,5 billones de dólares en el PIB global. La reanudación de la guerra también ha puesto a la región en alerta máxima. Además de las nuevas ofensivas de EEUU contra territorio iraní y de los ataques iraníes a embarcaciones en Ormuz y contra varios países aliados de EEUU en la zona, entre ellos Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, el grupo yemení al-houthistas –otro de los aliados regionales de Irán– ha amenazado con retomar sus ataques contra barcos en el paso de Bab el-Mandeb y ha advertido incluso con la posibilidad de cerrar ese estrecho, que conecta el Golfo de Omán con el Mar Rojo. Análisis apuntan a que una acción conjunta en Ormuz y Bab el-Mandeb podría ser utilizada como herramienta de presión por Irán por las previsibles afectaciones del cierre en la economía global.

Paralelamente, otros análisis plantean que en el horizonte también se vislumbra la posibilidad de que EEUU intente tomar la estratégica isla iraní de Jarg. Esta opción había sido descartada en la primera fase porque supondría el despliegue de tropas en terreno. En las decisiones de Trump continuarán pesando, entre otras cosas, los cálculos electorales por la proximidad de los comicios de medio término. El factor electoral también será un elemento decisivo en la posición de Israel, ya que el Gobierno de Netanyahu se juega su futuro en las elecciones convocadas para octubre. En el caso de Irán, como se ha mencionado, se espera que las fracturas políticas internas continúen siendo un factor relevante. Los funerales de varios días del ayatollah Khomeini celebrados a principios de julio expusieron las críticas de los sectores de línea dura, que transformaron las procesiones en protestas políticas contra el presidente Masoud Pezeshkian y su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, por su rol en las negociaciones con EEUU sobre el dossier nuclear y el alto el fuego. Los días de funeral escenificaron las aspiraciones de venganza y represalias contra Israel y EEUU.



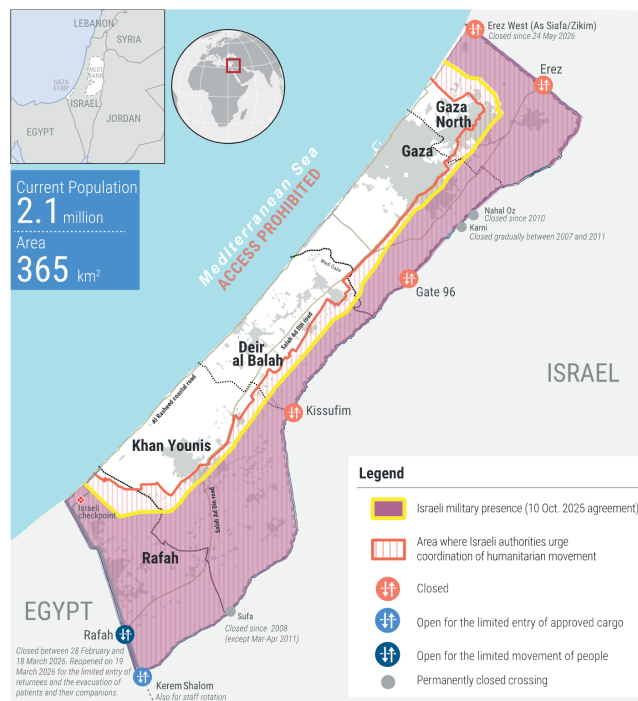
La situación en Gaza continúa siendo crítica a nueve meses del anuncio del plan de Trump. Fuente: [UNRWA](#)

ISRAEL – PALESTINA

El plan de Trump no cesa la violencia e impulsa controvertidas medidas, mientras el Gobierno de Netanyahu persiste en continuas vulneraciones

Tras cumplirse nueve meses desde el anuncio del plan de Donald Trump para Gaza –presentado en octubre y refrendado por el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre de 2025– los ataques de Israel persisten de manera cotidiana en la Franja, la entrada de ayuda humanitaria continúa siendo extremadamente insuficiente y no se registran avances en materia de reconstrucción. Desde la puesta en marcha del presunto alto el fuego y hasta mediados de julio las periódicas ofensivas israelíes habían causado la **muerte de más de 1.100 palestinos y palestinas, elevando el balance de letalidad desde octubre de 2023 a más de 73.200**, según los datos de OCHA. Las necesidades de la población palestina de Gaza continuaban siendo ingentes, en un escenario caracterizado por altísimos niveles de inseguridad alimentaria, expansión de enfermedades y plagas, carencias extremas de infraestructuras de saneamiento y acceso a agua potable. El Gobierno de Benjamin Netanyahu persistió en la imposición de obstáculos para el acceso de ayuda humanitaria y para el trabajo de organizaciones internacionales que venían desempeñando una labor fundamental en la Franja.

Las vulneraciones israelíes no se han limitado al uso continuo de la violencia y al bloqueo a la ayuda



Fuente: [OCHA OPT](#).

humanitaria. También se han materializado en una **ampliación del control israelí de la Franja, que ahora equivale a más de 60% del territorio**, lo que supone que la población gazatí –más de dos millones de personas–, desplazadas una y otra vez, están hacinadas en espacios cada vez más limitados. A finales de abril, mapas elaborados por las propias fuerzas israelíes que trascendieron a la prensa evidenciaron un control del 64% de Gaza, extendiendo así el dominio israelí más allá de la llamada “línea amarilla” que permitió a Israel mantener el control de 50% del territorio en la primera fase del alto el fuego. **La expansión del área militarizada por Israel en Gaza ha establecido una nueva línea en el territorio palestino, la “línea naranja”, en la que las autoridades israelíes exigen coordinación para las operaciones humanitarias.** A esto se suma que, a finales de mayo, **Netanyahu ordenó a sus fuerzas expandir aún más el control hasta llegar al 70%**, hecho que acrecentó los temores de que se vayan a producir más expulsiones masivas de palestinos y palestinas de Gaza. A pesar de estas y otras vulneraciones por Israel, la autodenominada Junta de Paz –el ente internacional encabezado por el propio Trump que en teoría debe liderar y supervisar la implementación del plan– **señaló a Hamas como el principal obstáculo para la implementación del pacto.** A mediados de mayo, la Junta presentó su primer informe bianual al Consejo de Seguridad de la ONU y subrayó que el problema clave era que Hamas se negaba a entregar sus armas y traspasar el poder a una administración civil en Gaza. Según ha trascendido, Hamas insiste en el rechazo a las propuestas de desarme por considerar que Israel está incumpliendo sus obligaciones de alto el fuego y manteniendo restricciones a la ayuda humanitaria. Israel, en tanto, se niega a replegarse de Gaza hasta que la milicia palestina entregue las armas. El informe de la Junta, y en particular el rol del alto representante de la Junta para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, fue criticado por culpar solo a Hamas del bloqueo en el proceso sin hacer mención directa de las violaciones cometidas por Israel.

Hoja de ruta y disolución de gobierno de Hamas

El informe de la Junta detalló una propuesta de **hoja de ruta de 15 puntos**, que fue presentada por Nickolay Mladenov y los países “garantes” del acuerdo: EEUU, Egipto, Qatar y Türkiye. Esta hoja de ruta reconoce al comité de tecnócratas palestinos establecido en enero (bajo supervisión de la Junta) –el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés)– como la única autoridad de transición. Según lo dispuesto, el despliegue de este comité requiere que Hamas cese todas sus actividades militares y administrativas en la Franja y, especialmente, que inicie un proceso de

Israel ha persistido en el uso de la violencia, ha continuado bloqueando el acceso de ayuda humanitaria y ha ampliado el control de territorios en Gaza

Análisis indican que Hamas no desea hacer concesiones al Gobierno de Netanyahu antes de las elecciones en Israel, convocadas para finales de octubre

entrega de armas verificado internacionalmente. El desmantelamiento progresivo de los arsenales de Hamas es considerado, por tanto, como el elemento central que, entonces, daría paso a un repliegue escalonado de las fuerzas israelíes y al inicio de la reconstrucción en las zonas que se certifiquen como desmilitarizadas. Las conversaciones sobre la hoja de ruta continuaban y, en el intertanto, el comité palestino (NCAG) seguía preparando la eventual transición desde Egipto, ya que Israel no había autorizado su acceso a la Franja.

Según trascendió, Hamas se ha mostrado dispuesto a entregar sus armas bajo determinadas condiciones. El tema ha sido discutido en varias reuniones en El Cairo y las conversaciones han abordado quién se haría cargo de los arsenales, cómo y dónde se almacenarían estas armas y si algunas de ellas –como los rifles de asalto– deben ser

consideradas o no como armas ofensivas (y, por tanto, entregadas). Sin embargo, diversas informaciones apuntan que será difícil avanzar en este ámbito mientras Israel persista en sus continuos ataques sobre la Franja y sin que exista un horizonte de solución política a la cuestión palestina. En este contexto, **Hamas anunció a principios de julio la disolución de su gobierno en Gaza con la intención de ceder la administración al comité técnico palestino (NCAG).** La medida fue interpretada como una señal de Hamas sobre su voluntad de traspasar el poder formal en la Franja y demostrar que intenta desbloquear la implementación del pacto. En la práctica, la disolución

del gobierno de Hamas conllevará la administración a través de un equipo técnico hasta que el NCAG pueda acceder a Gaza. La Junta tomó nota de la disolución, enfatizando que valorará el anuncio en función de los hechos prácticos y el cumplimiento del principio que pretende promover (“una autoridad, una ley y un arma”). Algunos análisis subrayaron que Hamas mantiene su esquema de poder en la Franja y que el anuncio responde más a una estrategia para ganar tiempo y reducir las presiones de los mediadores. De esta manera, además,

Hamas buscaría evitar hacer concesiones al Gobierno de Netanyahu antes de las elecciones en Israel el próximo 27 de octubre. El anuncio de los comicios en Israel ha alentado los temores de que Netanyahu pueda intensificar su ofensiva en Gaza antes de las elecciones por cálculos electorales.

En paralelo a estos desarrollos, el plan de Trump también ha dado pie al impulso de otras medidas controvertidas. Entre ellas, la manera en que se está planteando gestionar la reconstrucción. Informaciones de prensa han alertado que **el ambicioso plan presentado por el Gobierno de EEUU ha derivado en un plan piloto de pequeña escala centrado en un área del sur de Gaza.** En esta zona,

cerca de Rafah, se pretende crear un campo temporal para un número muy limitado de los dos millones de gazatíes desplazados, aunque no se espera que se instale antes de fin de año, ya que no ha habido avances en su construcción. La zona estaría bajo administración palestina y contaría con la presencia de una acotada fuerza internacional. Algunos análisis indican que se buscaría debilitar progresivamente el control de Hamas sobre la población de Gaza permitiendo la entrada de civiles en zonas no controladas por el grupo en las que contarían con unas mejores condiciones relativas, en comparación con la devastación que afecta al conjunto del territorio. Informaciones de prensa indican que un número limitado de efectivos de Marruecos y Kosovo llegaron a Israel para establecer así el germen de la anunciada Fuerza de Estabilización Internacional que controlaría la seguridad en el marco de este plan piloto. Inicialmente, esta fuerza estaba concebida como una operación de mayor alcance que, según se había anunciado, contaría con miles de efectivos. En otra iniciativa polémica, medios de comunicación advirtieron que **la Junta de Trump estaba elaborando documentos para garantizarse inmunidad por sus acciones en Gaza**. La inmunidad se extendería a los miembros de la Junta y de la Fuerza de Estabilización Internacional, entre otros actores.

Políticas de anexión en Cisjordania y señalamiento por crímenes

Adicionalmente, la situación en Cisjordania y Jerusalén ha continuado deteriorándose en los últimos meses, como consecuencia de un conjunto de políticas israelíes

que confirman las ambiciones de anexión de facto del Gobierno de Netanyahu. La población palestina ha sido objeto de crecientes ataques por parte de los colonos israelíes, que han continuado expandiéndose en territorio palestino. Organizaciones de derechos humanos también han alertado sobre la conducta de las fuerzas israelíes y sobre una “Gazificación” de Cisjordania, señalando además que están tomando el control de territorios del Área A –teóricamente bajo control de la Autoridad Palestina, según los acuerdos de Oslo– para construir una base militar. A esto se suma la imposición de medidas administrativas que refuerzan el control por parte de Israel, que amenazan con exacerbarse a medida que se aproximen las elecciones de octubre. Asimismo, cabe destacar que en el último trimestre las políticas israelíes fueron objeto de señalamiento a nivel internacional. El último **informe del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos armados** señaló a Israel como uno de los actores implicados en este crimen. El informe denunció la utilización de **violaciones, violencia en los genitales y desnudos forzados por parte de soldados y policías israelíes** contra población palestina. La Comisión Internacional de Investigación Independiente de Naciones Unidas también volvió a **señalar a Israel por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad al publicar un informe específico sobre el impacto de la violencia en niñas y niños palestinos**. El documento difundido a finales de junio subrayó que se ha documentado el asesinato deliberado de menores a manos de las fuerzas israelíes, con más de 20.000 muertos desde octubre de 2023. A esto se suman las decenas de miles de niñas y niños heridos y con secuelas físicas y psicológicas derivadas del genocidio.

El nombramiento de un panel negociador por parte del Gobierno propicia la reanudación del proceso de paz y revierte meses de tensión en Mindanao

El 15 de julio, el presidente Ferdinand Marcos **nombró** como jefe del Panel de Implementación de la Paz del Gobierno para el proceso de paz con el MILF a Mel Senen Sarmiento, que simultaneará el cargo con el de Asesor Presidencial para la Paz, la Reconciliación y la Unidad. El cargo de jefe negociador del panel gubernamental permanecía vacante desde el mes de febrero, tras la renuncia del general retirado Cesar Yano. En numerosas ocasiones desde entonces, tanto el MILF como organizaciones de la sociedad civil habían advertido que la falta de un panel negociador funcional por parte del Ejecutivo suponía la **suspensión de facto del proceso de negociación** y de la implementación del acuerdo de paz de 2014. El MILF declaró que la inexistencia del jefe del panel negociador del Gobierno no suponía una simple vacante administrativa, sino una ruptura estructural del proceso de paz. De hecho, a mediados de marzo de 2026 el MILF suspendió temporalmente su participación en las negociaciones hasta que Manila no nombrara a un sucesor de Yano.

En los meses anteriores a la dimisión de Yano, las relaciones entre las partes se habían deteriorado notablemente, hasta el punto de que el organismo que supervisa la implementación del acuerdo –el Third Party Monitoring Team (TPMT)– advirtió a mediados de 2025 de que la confianza entre las partes estaba en su nivel más bajo desde la firma del acuerdo y de que el proceso de negociación se hallaba en una coyuntura peligrosa. A modo de ejemplo, en marzo de 2025 Ferdinand Marcos proclamó unilateralmente a un alto dirigente del MILF, Abdulrauf Macacua (jefe militar del MILF y gobernador de Maguindanao del Norte) como jefe de gobierno de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán en sustitución de Ebrahim Murad, líder histórico del MILF. Más tarde, en julio de ese año, el MILF ordenó la paralización del proceso de desmovilización de alrededor de 14.000 combatientes hasta que el Gobierno no cumpliera con varias de las disposiciones del acuerdo de paz, como la provisión de asistencia socio-económica

a los 26.000 combatientes que sí que habían iniciado el proceso de desarme. Posteriormente, en agosto de 2025, el MILF prohibió a sus miembros participar en cualquier actividad relacionada con la desmovilización organizada por el Gobierno sin autorización previa de Murad Ebrahim.

En su toma de posesión del cargo, Sarmiento –que en abril fue nombrado nuevo **Asesor Presidencial para la Paz, la Reconciliación y la Unidad**, encargado de la política de paz del Gobierno y de las distintas negociaciones que mantiene activas el Estado filipino, no solamente con el MILF, sino también con otros grupos insurgentes–reafirmó el compromiso del Gobierno de Marcos con la plena implementación del Acuerdo de Paz y adelantó su intención de redoblar los sus esfuerzos para tal fin, instando al MILF y a la comunidad internacional a trabajar de manera estrecha y constructiva. Por su parte, Mohagher Iqbal, jefe del Panel de Implementación de la Paz del MILF desde

2016 y previamente jefe negociador del grupo desde 2003 a 2014, celebró el nombramiento de Sarmiento, señaló que el hecho de que forme parte del Gobierno (con rango de ministro) hace que pueda asumir compromisos y declaró que lo único que deben hacer ambas partes es mantener el rumbo de la implementación del acuerdo.

Varias **organizaciones de la sociedad civil** cuestionaron el hecho de que Sarmiento **ocupe de manera simultánea dos cargos tan importantes**, pero a la vez señalaron que la reactivación del panel negociador gubernamental podría comportar la reanudación del proceso de paz y así poder hacer frente a algunos retos importantes, como el desarme, desmovilización y reintegración de 14.000 de los 40.000 combatientes del MILF –proceso paralizado desde mediados de 2025–, la desarticulación de grupos armados que operan en la región desde hace décadas o la celebración en septiembre de las primeras elecciones de la historia en la región de Bangsamoro, que pondrán fin a la fase de gobierno interina liderada por el MILF (2019-2026).

ÁFRICA

BURKINA FASO: La Junta Militar intensifica la persecución a la oposición en el país

ETIOPIA: Creciente fragilidad del acuerdo de paz de la región de Tigré y elecciones bajo tensión

MALÍ: El asedio a Bamako desestabiliza el control del régimen militar

RDC: La epidemia de ébola en el país se convierte en una de las más graves a nivel mundial en medio del conflicto y la crisis humanitaria en el este

RDC (ESTE): La guerra y la crisis multidimensional persisten en el este del país pese a los esfuerzos diplomáticos internacionales

SOMALIA: Estancamiento en el conflicto armado con al-Shabaab y grave crisis electoral

SOMALIA – SOMALILANDIA: Se incrementa la tensión entre Somalia y Somalilandia y en la región, a raíz del reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel

SUDÁFRICA: El país afronta los ataques contra personas migrantes más graves de una década

BURKINA FASO

La Junta Militar intensifica la persecución a la oposición en el país

El trimestre estuvo marcado por la profundización simultánea de la violencia armada y de la represión contra la sociedad civil. El 2 de abril, Human Rights Watch (HRW) publicó un [informe exhaustivo](#) en el que documenta la muerte de más de 1.800 civiles entre enero de 2023 y agosto de 2025 a manos del Ejército, las milicias civiles aliadas (VDP) y el grupo yihadista JNIM (afiliado a Al Qaeda). HRW califica de “limpieza étnica” el ataque sistemático de las fuerzas estatales contra la población fulani. La respuesta de la Junta Militar encabezada por el capitán Traoré fue rechazar el informe, amenazar a las organizaciones de la sociedad civil y [disolver 118 organizaciones de la sociedad civil](#) el 15 de abril, muchas dedicadas a los derechos humanos. Para ello, la Junta Militar invocó la restrictiva ley de asociación de julio de 2025. La represión contra la oposición se amplió en mayo, produciéndose la detención del influyente imán Mohamad Ishaq Kindo tras criticar el proyecto de ley de libertades religiosas, la suspensión del mayor sindicato estudiantil del país (UGEB) así como de más de 450 organizaciones adicionales (más de 900 suspendidas o disueltas desde mediados de abril). Posteriormente, en el mes de junio, la Junta dirigió el cerco hacia las asociaciones religiosas, aprobando la Asamblea Nacional una controvertida ley que somete a las confesiones a mayor control estatal. De forma paralela, la Junta prohibió de forma indefinida al medio francés TV5 Monde, y el 26 de junio anunció la [ruptura de relaciones diplomáticas con Francia](#), a la que acusó de “ambiciones neocoloniales” y de apoyar “redes subversivas y terroristas”. París lamentó la decisión calificándola de “hostil e infundada” y anunciando que estudiará medidas recíprocas.

ETIOPIA

Creciente fragilidad del acuerdo de paz de la región de Tigré y elecciones bajo tensión

Durante el último trimestre, la evolución política y de seguridad en Etiopía estuvo marcada por las [tensiones](#)

entre Addis Abeba y el movimiento político-militar TPLF, que llevaron el proceso de paz de Tigré a su momento más delicado desde la firma del Acuerdo de Pretoria en 2022. Paralelamente, las insurgencias de Fano en Amhara y del Ejército de Liberación Oromo (OLA) en Oromiya mantuvieron elevados niveles de violencia e inseguridad. Por último, la disrupción del proceso electoral en algunas zonas evidenció el clima de inestabilidad que padece el país.

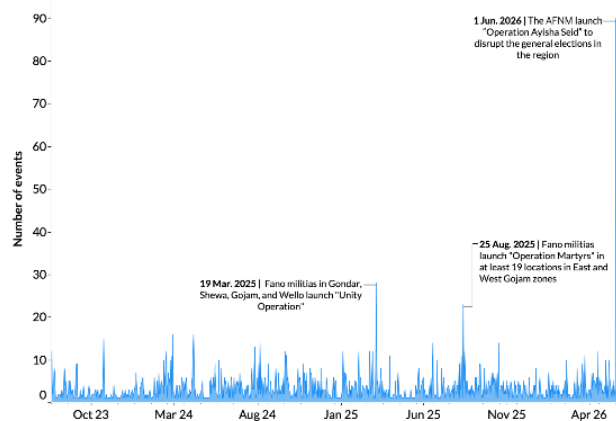
La principal fuente de preocupación fue la evolución de la situación en Tigré. Durante los primeros meses de 2026 se aceleró el [deterioro de las relaciones entre Addis Abeba y el TPLF](#), en un contexto marcado por el incumplimiento parcial de varios puntos esenciales del acuerdo de Pretoria. Siguen sin resolverse cuestiones clave como los litigios territoriales, la reintegración de combatientes, la justicia transicional o el retorno de desplazados, lo que ha alimentado un escenario descrito por algunos analistas como de inestabilidad gestionada: [la guerra a gran escala ha terminado, pero las causas estructurales del conflicto permanecen intactas](#).

La crisis se agravó en abril cuando el Gobierno federal prorrogó unilateralmente por un año el mandato de Tadesse Werede al frente de la Administración Regional Interina de Tigré (ARI). El TPLF denunció la decisión como una violación del acuerdo de Pretoria por el intervencionismo del Gobierno Federal en el ámbito de toma de decisiones de la ARI, y anunció su intención de restablecer las instituciones regionales previas a la guerra 2020-2022, en las que el TPLF tenía autonomía plena. En mayo, el partido dio un paso más al destituir a la administración respaldada por Addis Abeba y asumir directamente el control político de la región, bajo el liderazgo de Debretsion Gebremichael. Este movimiento fue interpretado como un desafío frontal a la autoridad federal y como una ruptura de facto del delicado equilibrio alcanzado tras la guerra, [según destacó el ICG](#).

La tensión siguió aumentando en junio. El TPLF advirtió del riesgo de un nuevo conflicto, aprobó medidas de movilización militar obligatoria y acusó al Gobierno federal de concentrar fuerzas alrededor de la región. Por su parte, Addis Abeba denunció que sectores del TPLF preparaban una nueva ofensiva con apoyo eritreo. La imposición de [restricciones de visado por parte de](#)

Daily armed clashes in Amhara

1 August 2023 - 4 June 2026



Fuente: ACLED, 10 de junio de 2026.

EEUU contra actores relevantes de Tigré –y sus entornos familiares– considerados responsables de la escalada reflejó la creciente preocupación internacional por una posible reactivación del conflicto en el norte del país.

Las elecciones generales del 1 de junio estuvieron condicionadas por este contexto de inseguridad. El Partido de la Prosperidad del primer ministro Abiy Ahmed obtuvo una amplia victoria, con 438 de los 501 escaños parlamentarios en disputa. Sin embargo, la legitimidad del proceso quedó parcialmente empañada por la imposibilidad de votar en la región de Tigré y en varias circunscripciones de Amhara debido a la falta de control efectivo del Estado y a la persistencia de la violencia. Más de 140 centros electorales tuvieron que cerrar temporalmente por incidentes de seguridad.

Por otra parte, la situación en Amhara continuó siendo grave. Las milicias Fano intensificaron sus operaciones contra las fuerzas federales y trataron de sabotear el proceso electoral mediante restricciones de movimiento y ataques coordinados por la Amhara Fano National Movement (AFNM). Según ACLED, el día de las elecciones se registraron alrededor de 90 enfrentamientos armados entre combatientes Fano y las fuerzas de seguridad, una de las jornadas más violentas desde el inicio de la insurgencia en 2023. La creciente coordinación entre las distintas facciones Fano sugiere una consolidación operativa del movimiento, pese a los esfuerzos gubernamentales por debilitarlo, según ACLED. En comparación, ACLED registró 108 enfrentamientos en los que participaron milicias Fano durante todo el mes de mayo.

Por último, en Oromiya, la insurgencia del Ejército de Liberación Oromo (OLA) mantuvo una elevada capacidad de desestabilización. Durante el periodo electoral impuso restricciones de movimiento en amplias zonas y protagonizó ataques contra fuerzas gubernamentales y población civil. Especial preocupación generaron los ataques contra comunidades cristianas ortodoxas en la zona de Arsi, donde se registraron víctimas mortales, desplazamientos

y destrucción de iglesias y viviendas. Los combates entre el OLA y el Ejército continuaron concentrándose en las zonas occidental y central de la región.

MALÍ

El asedio a Bamako desestabiliza el control del régimen militar

El 25 y 26 de abril, Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), afiliado a Al Qaeda, y el Frente de Liberación del Azawad (FLA) lanzaron la mayor ofensiva coordinada desde 2012 con ataques simultáneos en Bamako y sus alrededores (base de Kati, aeropuerto), Mopti, Sévaré y las ciudades norteñas de Gao y Kidal. Como resultado, el ministro de Defensa, el general Sadio Camara, fue asesinado en el ataque con coche bomba contra su residencia en Kati; el FLA anunció la toma y control de Kidal –cuya toma en 2023 había representado un símbolo de la autoridad de la Junta Militar–, mientras JNIM proclamó el “asedio total” de Bamako. Los ataques pusieron de manifiesto la fragilidad del régimen y obligaron al general Goïta a asumir personalmente la cartera de Defensa, realizar una renovación de la cúpula militar (jefe de Estado Mayor y de la Guardia Nacional) y al lanzamiento de una purga tras detectar el tribunal militar indicios de colusión de militares en los ataques. Posteriormente, entre mayo y junio, JNIM buscó aislar y asfixiar la capital instalando controles en las carreteras para evitar el abastecimiento de la capital. En respuesta, la Junta Militar introdujo nuevas medidas de control territorial: 35 zonas militares vedadas a civiles y prohibición de venta de motocicletas grandes fuera de las ciudades. Asimismo, la Junta publicó recompensas por la detención de los líderes del JNIM (Iyad Ag Ghali, Amadou Koufa) y del FLA, siendo estas replicadas por JNIM con sus propias recompensas contra Goïta y altos cargos.

RDC

La epidemia de ébola en el país se convierte en una de las más graves a nivel mundial en medio del conflicto y la crisis humanitaria en el este

La actual epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), declarada oficialmente el 15 de mayo, se ha convertido en el tercer mayor brote registrado de esta enfermedad a nivel global y en el de crecimiento más rápido documentado hasta la fecha. El virus responsable es la cepa Bundibugyo, para la que no existe vacuna autorizada ni tratamiento específico. Aunque el brote fue detectado en mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que llevaba circulando silenciosamente durante semanas, probablemente desde marzo, en la provincia de Ituri, epicentro de la crisis. A 15 de julio de 2026, las autoridades congoleñas habían confirmado 2.073 casos y 796 fallecidos, con una letalidad cercana al 38%. Un total de 737 pacientes habían sido hospitalizados de forma aislada.

Sin embargo, tanto la OMS como el Instituto Nacional de Salud Pública de la RDC consideran que la magnitud real podría ser entre dos y cuatro veces superior debido a las limitaciones de vigilancia epidemiológica y diagnóstico. El brote ha afectado ya a cinco provincias orientales y nororientales (Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo y Haut-Uélé) y se han registrado casos vinculados en Uganda. En Uganda se han contabilizado 20 casos y dos fallecidos. El 16 de julio, Uganda dio de alta al último paciente de ébola que había estado recibiendo tratamiento en el Centro Nacional de Aislamiento de Mulago. El **Ministerio de Salud de Uganda** anunció el inicio de la cuenta regresiva de 42 días para declarar el fin del brote. Se trata del tercer peor brote de esta enfermedad registrado hasta la fecha a nivel mundial, solo por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios y de otro que afectó al este congolés entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

La respuesta sanitaria está condicionada por un contexto extremadamente complejo. La epidemia se desarrolla en una región marcada por la presencia de grupos armados, desplazamientos masivos de población, inseguridad alimentaria y sistemas sanitarios muy debilitados. **La ONU estima que casi 27 millones de personas** sufren inseguridad alimentaria en el país. La violencia dificulta el rastreo de contactos, limita el acceso de los equipos médicos y favorece la propagación de la enfermedad. A ello se suma la falta de confianza de parte de la población hacia las autoridades sanitarias, la difusión de rumores y la resistencia a modificar prácticas funerarias tradicionales, un factor especialmente relevante en la transmisión del virus. Se han producido ataques contra centros de tratamiento, equipos de respuesta y voluntarios de la Cruz Roja encargados de realizar enterramientos seguros.

Otro elemento que ha agravado la situación es la **huelga de trabajadores sanitarios en Ituri** por impago de salarios y compensaciones. Médicos, epidemiólogos, conductores y personal funerario han denunciado retrasos de varios meses en los pagos pese a trabajar en primera línea frente a la epidemia. Además, un número significativo de profesionales sanitarios se ha infectado durante la respuesta.

Aunque la comunidad internacional ha empezado a movilizar **recursos**, el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, ha señalado que deben acelerarse todos los esfuerzos para frenar la epidemia. La ONU ha liberado fondos de emergencia, desplegado **un coordinador especial para el ébola** y activado mecanismos reforzados de respuesta humanitaria. Paralelamente, la OMS ha autorizado los primeros ensayos clínicos para evaluar posibles tratamientos contra la cepa Bundibugyo. No obstante, los organismos internacionales advierten que, sin un incremento rápido del apoyo financiero, sanitario y logístico, la epidemia podría seguir expandiéndose por la región de los Grandes Lagos. Numerosas voces y estudios han señalado como una de

las causas directas de la expansión de la epidemia de ébola los **profundos recortes y el cuasi desmantelamiento de USAID**, entre otras agencias y programas, que llevó a cabo la Administración estadounidense bajo la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por **Elon Musk**. Estos recortes han afectado a la salud, la nutrición y la educación a nivel mundial. Un estudio de **The Lancet** sobre los impactos de USAID en los últimos 20 años publicado a mediados de 2025 estimó que habría 14 millones de muertes, incluyendo 4,5 millones de muertes infantiles, si se aboliera por completo la agencia de desarrollo USAID.

RDC (ESTE)

La guerra y la crisis multidimensional persisten en el este del país pese a los esfuerzos diplomáticos internacionales



Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre RDC. Fuente: **UN Photo/Manuel Elías**.

Entre abril y mediados de julio de 2026, la situación de seguridad en el este de la República Democrática del Congo (RDC) continuó deteriorándose a pesar de los esfuerzos diplomáticos impulsados por EEUU, Qatar, la UA y otros actores regionales. Los procesos de paz facilitados por Washington y Doha lograron mantener canales de diálogo entre Kinshasa, Rwanda y el grupo armado M23, pero tuvieron un impacto limitado sobre el terreno, donde se intensificaron los combates, aumentó el uso de drones y continuaron las graves violaciones de derechos humanos.

Según el **informe del Grupo de Expertos de la ONU** publicado en junio, el M23, respaldado por Rwanda, consolidó durante los últimos meses su control sobre amplias zonas de Kivu Norte y Kivu Sur, reforzando estructuras administrativas paralelas y manteniendo su objetivo político de transformación del sistema de Gobierno congolés. Aunque algunos repliegues fueron presentados como gestos de desescalada, la ONU concluyó que en muchos casos se trató de reposicionamientos tácticos más que de retiradas reales. Al mismo tiempo, Kinshasa siguió apoyándose en las milicias progubernamentales Wazalendo para contener el avance rebelde, mientras continuaban las acusaciones cruzadas entre la RDC y Rwanda sobre el apoyo a grupos armados rivales.

En abril, **las conversaciones reanudadas en Suiza** bajo patrocinio estadounidense y qatari dieron lugar a compromisos sobre acceso humanitario, liberación

de prisioneros y mecanismos de verificación del alto el fuego. Sin embargo, las medidas acordadas apenas se implementaron y los enfrentamientos continuaron en Kivu Norte y Kivu Sur. Desde la firma del acuerdo de Washington el 27 de junio de 2025 se han celebrado seis reuniones del Comité de Supervisión Conjunta (Joint Oversight Committee, JOC) formado por representantes de RDC, Rwanda, EEUU, Qatar, Togo (como mediador designado por la UA) y por la Comisión de la UA, **la última el 24 de junio en Londres**, en la que se reafirmaron los esfuerzos de las partes implicadas en la consecución de la paz y se evidenciaron los lentos avances para su implementación real. En este sentido, la situación se agravó especialmente en torno a Minembwe y otras zonas estratégicas de las tierras altas de Kivu Sur, donde tanto las fuerzas gubernamentales como las milicias aliadas intentaron recuperar posiciones controladas por grupos afines al M23.

Durante mayo y junio se observó además una creciente sofisticación militar. Según el informe del **Grupo de Expertos**, tanto las FARDC como el M23 incrementaron el **empleo de drones armados** y ataques de precisión. El aeropuerto de Kisangani fue objeto de repetidos ataques y la expansión de la guerra a distancia aumentó significativamente los riesgos para la población civil. Naciones Unidas alertó de que el uso de artillería pesada, sistemas aéreos no tripulados y armas explosivas en zonas pobladas estaba provocando nuevas víctimas civiles y desplazamientos masivos.

Paralelamente, la amenaza de otros grupos armados siguió siendo muy importante. Las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas a Estado Islámico (ISIS), mantuvieron una intensa campaña de violencia en la provincia de Ituri y Beni (zona norte de la provincia de Kivu Norte). Solo entre abril y junio causaron centenares de víctimas civiles, consolidándose como **la segunda rama más activa y letal de ISIS en el mundo**, según destacó el propio **Grupo de Expertos**. La MONUSCO documentó cientos de muertos civiles y más de un millar de violaciones de derechos humanos desde marzo, incluidas ejecuciones, desplazamientos forzados y violencia sexual relacionada con el conflicto. El contexto humanitario siguió agravándose. Más de ocho millones de personas desplazadas internos, cerca de 27 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria y la irrupción de la grave epidemia de ébola en las provincias del este configuraron una crisis multidimensional. La inseguridad y el control fragmentado del territorio dificultaron la asistencia humanitaria y la respuesta sanitaria.

En el plano político, la creciente violencia coincidió con un debate cada vez más intenso sobre el futuro institucional del país. Desde abril, la coalición presidencial promovió reformas constitucionales interpretadas ampliamente como un intento de abrir la puerta a un tercer mandato del presidente Félix Tshisekedi, **según destacó el ICG**. En mayo, el propio mandatario afirmó que se presentaría nuevamente “si el pueblo lo desea”, mientras que en junio el Parlamento aprobó una ley para convocar un

referéndum constitucional. La oposición denunció un “golpe constitucional”, organizó movilizaciones y advirtió de que una modificación de los límites presidenciales podría aumentar la inestabilidad política en un momento en que el país afronta una de las peores crisis de seguridad de las últimas décadas.

SOMALIA

Estancamiento en el conflicto armado con al-Shabaab y grave crisis electoral

Durante el último trimestre Somalia vivió un periodo marcado por dos dinámicas interrelacionadas: la persistencia del conflicto armado con al-Shabaab y el agravamiento de las disputas políticas en torno al modelo electoral. A estas cuestiones se sumó una creciente tensión diplomática con Somalilandia, tras el reconocimiento de su independencia por parte de Israel en diciembre de 2025. Aunque el Gobierno federal mantuvo cierta iniciativa en materia de seguridad militar y logró evitar avances estratégicos de la insurgencia sobre Mogadiscio, el contexto general siguió caracterizado por una elevada fragilidad institucional y una creciente fragmentación política.

En el plano de la seguridad, al-Shabaab continuó siendo la principal amenaza para el Estado somalí. **Según un informe del International Crisis Group (ICG)**, el conflicto ha regresado a una situación de estancamiento similar a la existente antes de la ofensiva gubernamental de 2022-2023. Tras recuperar durante 2025 buena parte de los territorios perdidos en las regiones centrales de Hiiraan y Middle Shabelle, la organización yihadista consolidó sus posiciones y adaptó su estrategia combinando presión militar con una gestión más pragmática de las poblaciones bajo su control. El grupo redujo algunas prácticas especialmente impopulares, reforzó sus relaciones con líderes comunitarios y adoptó un enfoque menos coercitivo en determinadas zonas para reducir la resistencia local, según el ICG.

Durante el trimestre, las fuerzas gubernamentales mantuvieron una campaña sostenida de operaciones terrestres y ataques aéreos, especialmente en Lower



Un equipo de OCHA se reúne con comunidades afectadas por la sequía en Mudug, Somalia. Fuente: **OCHA/Erich Ogoso**.

Shabelle, Middle Shabelle y Hiiraan. En abril, mayo y junio se registraron numerosas operaciones contra posiciones de al-Shabaab y varias acciones de fuerzas especiales apoyadas por socios internacionales, **según destacó el ICG**. Sin embargo, la insurgencia conservó capacidad para ejecutar atentados con artefactos explosivos improvisados, infiltrarse en áreas urbanas y amenazar los preparativos electorales, particularmente en Hirshabelle. Análisis coinciden en que ninguna de las partes parece capaz de obtener una victoria decisiva, mientras la futura reducción de la presencia de la misión africana de apoyo AUSSOM genera incertidumbre sobre la capacidad del Estado para sostener la presión militar.

Paralelamente, el país entró en una nueva crisis política vinculada al proceso electoral. El mandato original de cuatro años del presidente Hassan Sheikh Mohamud expiró formalmente el 15 de mayo, pero el Gobierno Federal sostuvo que las reformas constitucionales aprobadas con anterioridad habían ampliado el mandato presidencial hasta 2027. La oposición, agrupada en torno al Somalia Future Council e integrada también por Puntlandia y Jubalandia, rechazó esta interpretación y denunció un intento de concentración de poder por parte de Mogadiscio, **según destacó Security Council Report en junio**. Türkiye, a través de sus servicios de inteligencia (MIT) y el Ministerio de Exteriores, intentó facilitar espacios de diálogo y mediación entre las partes, celebrando conversaciones por separado como primer paso de cara a llevar a cabo conversaciones directas con la facilitación de representantes occidentales. Cabe destacar que la oposición señaló que **Türkiye no podía llevar a cabo la mediación en solitario**, por considerar que su capacidad de influencia era limitada, que no era neutral en el contencioso y que era necesaria la implicación de la comunidad internacional.

Las **tensiones alcanzaron su punto más alto en mayo y junio**. En Baidoa, capital del Estado de Suroeste, estallaron enfrentamientos armados entre fuerzas federales y milicias leales al antiguo presidente regional Abdiyaziz Laftagareen tras la imposición por parte del Gobierno federal de una nueva administración alineada con Mogadiscio. Poco después, en la propia capital somalí, milicias vinculadas a destacados dirigentes opositores, entre ellos el expresidente Sharif Sheikh Ahmed y el ex primer ministro Hassan Ali Khaire, se enfrentaron a las fuerzas gubernamentales. Los combates dejaron víctimas mortales y obligaron a mediadores internacionales, **especialmente a Türkiye**, a impulsar nuevos esfuerzos de diálogo.

El núcleo de la disputa sigue siendo el modelo electoral. El Gobierno impulsa la transición hacia un sistema de sufragio directo, mientras que gran parte de la oposición y varios estados federados defienden mantener o reformar gradualmente el sistema indirecto basado en representación de tipo clánico. A finales de junio surgieron algunos indicios de acercamiento cuando la oposición presentó una propuesta alternativa que también

contemplaba elecciones directas para el Parlamento, aunque persistían desacuerdos fundamentales sobre el calendario, las instituciones supervisoras y la distribución del poder entre el Gobierno Federal y los estados federados.

SOMALIA – SOMALILANDIA

Se incrementa la tensión entre Somalia y Somalilandia y en la región, a raíz del reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel

Durante el trimestre se produjo un nuevo deterioro de las relaciones entre Somalia y Somalilandia con dimensiones regionales. El **reconocimiento oficial de Somalilandia por parte de Israel en diciembre de 2025** inauguró una nueva fase diplomática de tensión, decisión que recibió una condena unánime por parte de la comunidad internacional, liderada por el Consejo de Seguridad de la ONU, la UA, la OIC y la UE, entre otros organismos. EEUU ve con preocupación el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel por las potenciales consecuencias a nivel regional, y se negó oficialmente a seguir el ejemplo del Gobierno de Benjamin Netanyahu y reconocer la región separatista. Para preservar la lucha antiterrorista y las alianzas estratégicas en Mogadiscio, el Departamento de Estado de EEUU reafirmó formalmente la soberanía de Somalia, lo que ha frenado activamente las esperanzas y las probabilidades de Somalilandia de que Washington reconozca y celebre dicha alianza. Cabe añadir que en febrero **Somalilandia anunció su voluntad de garantizar a EEUU el acceso a sus recursos minerales** y a poder disponer de bases militares en su territorio. El ministro de la Presidencia de Somalilandia afirmó que estos derechos exclusivos ofrecidos a EEUU forman parte de la iniciativa de Somalilandia para obtener reconocimiento mundial.

Durante mayo y junio de 2026 Israel y Somalilandia avanzaron hacia una relación estratégica más profunda: se anunció la apertura de embajadas en Jerusalén y Hargeisa, el presidente de Somalilandia realizó una **visita “de Estado” a Israel** y se firmaron acuerdos de cooperación económica, política y de seguridad. La decisión de Somalilandia de abrir una representación diplomática en Jerusalén fue condenada por Palestina, la OIC y la Liga Árabe.

Mogadiscio percibe estos desarrollos como una amenaza directa a su integridad territorial. Las autoridades somalíes han advertido que la cooperación militar entre Israel y Somalilandia, incluida la posibilidad de futuras instalaciones estratégicas en Berbera, podría internacionalizar aún más la disputa sobre el estatus del territorio y convertir el Cuerno de África en un nuevo escenario de competencia geopolítica vinculada a la seguridad del Mar Rojo y al conflicto de EEUU e Israel con los al-houthistas de Yemen, donde el potencial uso del territorio de Somalilandia para atacar a los al-houthistas **podría suponer una nueva escalada del conflicto**.

SUDÁFRICA

El país afronta los ataques contra personas migrantes más graves de una década

Las movilizaciones y agresiones contra la población migrante africana en Sudáfrica escalaron de forma sostenida durante el trimestre hasta convertirse en la mayor ola xenófoba en el país en más de una década. Las movilizaciones comenzaron a multiplicarse a mediados de abril en las principales ciudades, hasta el punto de que la ONU expresó el 27 de abril su “profunda preocupación” por los ataques y el acoso a personas migrantes y extranjeras. El 6 de mayo, miles de personas participaron en una manifestación antimigrante en Durban y las réplicas se extendieron por Gauteng, KwaZulu-Natal, Estado Libre y Cabo Occidental. La dimensión regional afloró de inmediato: Ghana pidió ese mismo día que los “ataques xenófobos” se debatieran en la cumbre de la Unión Africana de finales de junio y repatrió a 300 de sus nacionales, mientras los grupos organizadores de las protestas anunciaban movilizaciones masivas para el 30 de junio.

En junio la violencia se intensificó con episodios letales. El Gobierno de Mozambique denunció la muerte de cinco de sus ciudadanos en ataques xenófobos en Mossel Bay (la policía sudafricana reconoció dos), y la prensa informó también del fallecimiento de al menos un ciudadano ugandés, además de vídeos virales en los que se impedía a migrantes acceder a servicios de salud o educación. Al frente de la escalada se situó el movimiento “March & March”, liderado por la exlocutora Jacinta Ngobese-Zuma

y secundado por el grupo Operation Dudula, que fijó el 30 de junio como ultimátum para que los extranjeros indocumentados abandonaran el país. La respuesta cívica llegó el 9 de junio con el lanzamiento de la campaña en defensa de la población migrante de los discursos de odio “*Siyafana Sonke*” (“Todas somos iguales” en lengua zulú) que exigió una intervención gubernamental urgente. En el plano político, el secretario general del ANC, Fikile Mbalula, condenó el 25 de junio el “secuestro” de los símbolos étnicos zulúes por parte del movimiento antimigrante y acusó a “nuevas formaciones políticas” –señalando al partido MK del expresidente Zuma– de manipular la inmigración irregular para “fabricar caos”, trazando paralelismos con los disturbios mortales de 2021.

El clima de amenaza provocó un éxodo forzado: decenas de miles de personas abandonaron el país –la policía cifró en 25.000 las personas que lo hicieron en las semanas previas–, incluidos más de 9.000 malauíes y unos 3.000 zimbabuenses por el paso de Beitbridge. La víspera del ultimátum dado por el movimiento xenófobo, el presidente Ramaphosa advirtió que “el derecho a la protesta no permite amenazar o intimidar a otros”. El 30 de junio, decenas de miles de manifestantes marcharon en Johannesburgo, Pretoria, Durban, Pietermaritzburg y Soweto exigiendo deportaciones. El fuerte despliegue policial evitó ataques contra migrantes de una magnitud comparables a los de 2008 (más de 60 muertos), aunque con incidentes aislados de saqueo de comercios de extranjeros. Según recogió la prensa, se produjeron más de 900 detenciones. Los organizadores anunciaron movilizaciones semanales hasta lograr deportaciones masivas.

AMÉRICA

BOLIVIA: Bolivia vive una de las oleadas de movilizaciones más importantes de los últimos años

BOLIVIA

Bolivia vive una de las oleadas de movilizaciones más importantes de los últimos años

Entre principios de mayo y finales de junio Bolivia vivió uno de los movimientos de protesta más importantes de los últimos años, con movilizaciones y cortes de carretera en la mayor parte de departamentos del país, que provocaron la paralización del país durante semanas y el desabastecimiento de la capital y otras ciudades durante semanas. Según un informe de la Defensoría del Pueblo hecho público a principios de julio, 22 personas murieron, 88 resultaron heridas (casi la mitad manifestantes, 19 policías) y 573 fueron arrestadas durante las movilizaciones y bloqueos de carreteras. De los 22 fallecimientos, tres ocurrieron durante operativos policiales y militares de desbloqueo de carreteras, seis en el siniestro de una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana y el resto en accidentes



Protestas en La Paz. Fuente: Wikimedia.

relacionados con piquetes o con la falta de atención médica derivada de las restricciones de movilidad. La Defensoría también registró 38 agresiones a periodistas, por parte de manifestantes, policía y Fuerzas Armadas.

La oleada de protestas se inició a principios de mayo, cuando cientos de personas convocadas por organizaciones sindicales y campesinas llegaron a La Paz tras una marcha de 25 días desde la Amazonía para expresar el rechazo a una ley de reforma agraria –promulgada el 8 de abril– que consideraban favorecía los intereses terratenientes y agroindustriales. En un contexto de crisis económica, tensión política e incremento de movilizaciones sectoriales de varios colectivos desde principios de 2026, el 3 de mayo la Central Obrera de Bolivia –en representación de más de 70 sindicatos– y la Federación de Campesinos Tupac Katari iniciaron una huelga general para exigir un aumento de los salarios y las pensiones, protestar por la escasez de combustible o las condiciones laborales de varios sectores y poner fin a las medidas de austeridad del Gobierno de Rodrigo Paz, que tomó posesión del cargo en noviembre de 2025. A partir de entonces, otros colectivos –como juntas vecinales, mineros, trabajadores del transporte y docentes– se fueron sumando a las protestas, y los bloqueos de carreteras, disturbios y enfrentamientos se extendieron progresivamente por varias regiones del país. Cabe destacar que a mediados de mayo miles de personas seguidoras del expresidente Evo Morales se sumaron a las movilizaciones y llevaron a cabo numerosas marchas y acciones de protesta en las provincias de Chapare y Cochabamba y en otros feudos tradicionales del partido político MAS –que lideró el Gobierno durante alrededor de dos décadas– para exigir la renuncia del presidente Paz y el retorno de Morales. El Gobierno, a pesar de reconocer las raíces agrarias y económicas de las protestas, también denunció que el exmandatario y su entorno político y sindical estaban instrumentalizando las movilizaciones para desestabilizar el país. Morales tiene abiertas varias causas judiciales y desde octubre de 2024 permanece en el Trópico de Cochabamba bajo la protección de cientos de seguidores para impedir que se ejecute una orden de captura en su contra. De hecho, el 11 de mayo un tribunal en Tarija (sur) ordenó su captura

tras **declararlo en rebeldía** por no haber comparecido –ni él ni sus abogados– en el juicio por supuesta trata de personas. Tanto en este caso como en ocasiones anteriores en los que no ha comparecido ante citaciones judiciales, Morales ha denunciado que las mencionadas causas judiciales están motivadas políticamente y ha exigido un proceso imparcial y legal.

Ante esta situación, durante el mes de mayo el Gobierno derogó la ley de reforma agraria que había dado origen a la protesta, inició varios procesos de diálogo con sindicatos mineros y otros colectivos, reorganizó su gabinete y propuso la creación de un consejo para que los manifestantes pudieran participar en el proceso de toma de decisiones, pero las protestas y los disturbios continuaron e incluso se agudizaron durante los meses de mayo y junio. El 8 de junio, por ejemplo, estallaron enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la ciudad de Cochabamba después de que el presidente Paz firmara una ley que permitía implementar medidas de emergencia con mayor facilidad.

Los niveles de conflictividad en el país empezaron a disminuir a finales de junio, tras el **acuerdo** que alcanzaron el 20 de junio el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, que incluía la liberación de personas detenidas, el resarcimiento a los vehículos dañados por gasolina adulterada, la regulación de la inflación para determinados productos o la consulta a organizaciones sociales sobre las políticas estructurales para salir de la recesión económica. Para garantizar el cumplimiento de los compromisos, el **acuerdo** contempla un calendario de implementación del pacto y la conformación de mesas de trabajo. Tras la firma de este acuerdo, el Gobierno declaró el estado de excepción por 90 días, prohibiendo los bloqueos de carreteras y el uso de armas y explosivos y permitiendo que la Policía y las Fuerzas Armadas reabrieran las carreteras principales, protegieran infraestructuras estratégicas y garantizara el abastecimiento de productos. Si bien algunas organizaciones sindicales y el entorno político de Evo Morales inicialmente rechazaron el acuerdo entre el Gobierno y la COB, finalmente **accedieron a poner fin a las protestas**.

ASIA

AFGANISTÁN: La detención de decenas de mujeres desencadena protestas contra el régimen talibán en Herat

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El conflicto entre ambos países corre el riesgo de enquistarse

INDIA – PAKISTÁN: Diplomáticos, políticos y sociedad civil se dirigen a los dos Gobiernos para reclamar el restablecimiento del diálogo y las relaciones bilaterales

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): Se agrava el conflicto en la región indonesia de Papúa Occidental

AFGANISTÁN

La detención de decenas de mujeres desencadena protestas contra el régimen talibán en Herat

Las detenciones en junio de al menos 30 mujeres por supuestas violaciones al código de vestimenta impuesto por el Gobierno talibán, y sin que sus familiares tuvieran noticias de a dónde habían sido trasladadas, motivaron protestas sociales en la ciudad de Herat que fueron reprimidas duramente por las fuerzas de seguridad talibán. Las primeras protestas se produjeron el 9 de junio con los gritos de “Educación, Trabajo, Libertad” y “Mujer, Vida, Libertad” (lema utilizado por mujeres iraníes en sus protestas contra la república islámica) y como consecuencia de la represión talibán, **al menos dos personas murieron en Herat**. Según medios locales, se trataba de dos chicos adolescentes. Los talibanes utilizaron fuego real para dispersar la manifestación, lo que provocó las dos muertes y numerosos heridos. Además, varias personas fueron detenidas. Las detenciones de mujeres motivaron la organización de protestas que se convocaron a través de diferentes grupos de WhatsApp. Entre las personas detenidas estaba una trabajadora de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, empleada en el hospital de Herat, lo que motivó la condena de esta organización. MSF señaló que las mujeres sostienen el sistema sanitario afgano a pesar de las graves restricciones a su trabajo que sufren como consecuencia de la legislación y las políticas discriminatorias actualmente vigentes. **En las semanas posteriores se produjeron nuevas detenciones de mujeres** en Herat, que fueron trasladadas a ubicaciones desconocidas y que también habrían sido detenidas por infringir el código de vestimenta. El llamado **Ministerio del Vicio y la Virtud señaló que los derechos de las afganas estaban garantizados y negó cualquier opresión sobre las mujeres**. La UNAMA, misión de Naciones Unidas en el país, expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias de mujeres y señaló que estas acarrearán un importante estigma en el país para las mujeres que han sido detenidas. Además, la UNAMA también señaló el uso excesivo de la fuerza en la respuesta a las manifestaciones.

Estas detenciones se produjeron en un contexto de mayor endurecimiento de las normas que restringen los derechos de las mujeres en el país desde la toma del poder por los talibanes en 2021. En mayo se publicó un **nuevo decreto talibán sobre la “Separación judicial de los esposos”** que autoriza de facto el matrimonio infantil sin establecer ninguna restricción por edad, que elimina cualquier noción de consentimiento y que, en la práctica, impide el cuestionamiento del matrimonio forzado, según

denunciaron organizaciones de derechos humanos. Además, el código refuerza la custodia masculina y establece múltiples barreras únicamente para las mujeres y las niñas, pero no para los hombres. Previamente, en enero se había aprobado otro decreto que elimina formalmente la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley y autoriza la violencia contra las mujeres, permitiendo castigos por parte de los maridos sobre las mujeres, incluyendo violencia física.

AFGANISTÁN – PAKISTÁN

El conflicto entre ambos países corre el riesgo de enquistarse

A lo largo del trimestre se repitieron los enfrentamientos armados entre Afganistán y Pakistán sin que se lograra retomar el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025 que colapsó en febrero tras el reinicio de las hostilidades. A principios de julio tuvieron lugar dos días consecutivos de enfrentamientos en la zona fronteriza en el distrito pakistaní de Khyber (provincia de Khyber Pakhtunkhwa, la más afectada por la insurgencia talibán), después de que, según señaló Pakistán, varios soldados pakistaníes resultaron heridos como consecuencia de ataques talibanes contra puestos de control de las fuerzas de seguridad pakistaníes. El 10 de junio, **las fuerzas de seguridad pakistaníes habían lanzado ataques aéreos contra bases del grupo armado talibán pakistaní TTP** en las provincias afganas de Kunar, Khost y Paktika en los que murieron 13 civiles según la UNAMA y 26 integrantes del TTP según el Gobierno pakistaní. Esta operación pakistaní dio lugar a una respuesta militar por parte de Afganistán, que llevó a cabo ataques con drones en Baluchistán y la Khyber Pakhtunkhwa, señalando que se trataba de bases del grupo armado ISIS-KP, supuesto que fue negado por Islamabad. En los días posteriores se produjeron nuevos ataques insurgentes en diferentes zonas de Pakistán, lo que motivó una nueva respuesta militar pakistaní contra territorio afgano. En los ataques que tuvieron lugar los días 28 y 29 de junio Pakistán afirmó haber matado a 25 insurgentes, pero Kabul señaló que habían muerto decenas de civiles y respondió con nuevos ataques con drones contra Pakistán.

En este contexto, China ha tratado de mantener canales de comunicación entre ambos países, pero resultaron infructuosos a lo largo del trimestre. Tras la ruptura del alto el fuego **Pakistán declaró la “guerra abierta” a Afganistán**, reiterando las acusaciones al régimen talibán de apoyo y complicidad con la insurgencia talibán pakistaní. Como consecuencia de la mediación de China se produjo



Retorno de población afgana refugiada en Pakistán. Fuente: ACNUR.

una reducción de la violencia, pero esta persistió con diferentes episodios a lo largo de todo el trimestre. A pesar de los intentos de China de ejercer presión sobre los dos países, el diálogo directo no se retomó después del encuentro que tuvo lugar en Urumqi en abril. Afganistán señala que Pakistán quiere que el Gobierno talibán asuma la completa responsabilidad de todos los atentados talibanes en Pakistán y que no están dispuestos a hacerlo y Pakistán señala la falta de voluntad afgana para controlar a la insurgencia talibán. De hecho, **International Crisis Group advirtió que Afganistán y Pakistán se están deslizando hacia una guerra prolongada** en la que Pakistán está favoreciendo la acción militar por encima de la diplomacia para presionar a Afganistán para que lleve a cabo una contención más contundente del grupo armado talibán pakistaní TTP. **Otros análisis** apuntaban a que Pakistán estaría buscando restablecer su influencia en Afganistán por la vía militar, ante la negativa afgana de subordinar sus intereses a la seguridad pakistaní.

Además, la **frontera entre ambos países ha permanecido cerrada** desde el mes de octubre, provocando un importante impacto social, económico y humanitario a los dos lados de la frontera, con consecuencias como la escasez de medicinas o la imposibilidad de acceder a tratamientos sanitarios en Pakistán para población afgana que habitualmente lo hacía en el país vecino, dada la situación de crisis del sistema de salud afgano. Naciones Unidas documentó la muerte de 372 civiles entre el 26 de enero y el 31 de marzo como consecuencia de las hostilidades entre Afganistán y Pakistán, que ocasionaron también 392 personas heridas. La mayor parte de estas muertes se debió a ataques aéreos, incluyendo el ataque contra un centro de rehabilitación para personas toxicómanas en Kabul, en el que murieron 269 personas y otras 122 resultaron heridas. Además, en marzo Naciones Unidas había advertido de que la escalada de la violencia había provocado el **desplazamiento forzado de 100.000 personas**. Por otra parte, persistieron los retornos forzados de población afgana desde Pakistán. El primer ministro pakistaní señaló que desde septiembre de 2023 habían retornado a Afganistán más de 2,4 millones de personas, pero Naciones Unidas situó la cifra de retorno en 2,9 millones de personas solo en el año 2025 (5 millones entre 2023 y 2025). El organismo internacional advirtió de la crisis humanitaria que atraviesa el país y apuntó a los retornos forzados como uno de los factores de agravamiento.

INDIA – PAKISTÁN

Diplomáticos, políticos y sociedad civil se dirigen a los dos Gobiernos para reclamar el restablecimiento del diálogo y las relaciones bilaterales

Personalidades de la sociedad civil, políticos y antiguos diplomáticos de ambos países se dirigen a los primeros ministros de India, Narendra Modi, y Pakistán, Shehbaz Sharif, **en una carta en la que reclaman a ambos mandatarios que se reestablezcan los lazos diplomáticos** entre los dos países y se normalicen las relaciones. Esta carta se produce en el marco de la ruptura del contacto entre India y Pakistán tras el conflicto armado que enfrentó a las dos potencias nucleares en 2025 y que tuvo una duración de cuatro días, conocido como la “guerra de las 88 horas”. Si bien el conflicto finalizó con el anuncio de un alto el fuego por parte tanto de India como de Pakistán, y con la participación de diferentes países como facilitadores del acuerdo –entre ellos EEUU, Arabia Saudita, Irán y Türkiye–, las relaciones bilaterales quedaron profundamente deterioradas y caracterizadas por un mayor alejamiento. Entre otras cuestiones, **India mantiene la suspensión del Tratado de Aguas del Indo (Indus Waters Treaty)**, un acuerdo sobre el uso compartido de las aguas del río Indo firmado en 1960 y cuya interrupción fue proclamada por la India tras el atentado que tuvo lugar el 22 de abril de 2025 en Cachemira y perpetrado por el grupo armado The Resistance Front. Este ataque causó la muerte de 26 hombres, víctimas de un tiroteo en la localidad turística cachemir de Pahalgam, en su práctica totalidad turistas hindúes procedentes de otras zonas de la India y fue el desencadenante de la guerra de las 88 horas.

En la carta dirigida a los mandatarios e impulsada por el Centre for Peace and Progress de India, se pedía la reanudación del diálogo, la reapertura del comercio y el transporte y la ampliación de los programas de intercambio a ambos lados de la frontera. La carta insta a adoptar “pasos significativos y sostenidos para restaurar la paz, la normalidad, el diálogo y la cooperación en Asia Meridional” y señala también que el “contacto constante y el diálogo son el único camino para resolver las diferencias. Entre las medidas diplomáticas que se proponen está la propia restauración de relaciones diplomáticas plenas, el restablecimiento de los altos comisionados –máxima representación diplomática de cada uno de los países–, la reanudación de los servicios de visa con normalidad y la revitalización de un diálogo global bilateral que aborde todas las cuestiones principales. Además, también se insta al diálogo sobre Jammu y Cachemira, la revisión del marco negociador entre 2004 y 2007, así como medidas de desmilitarización y desescalamiento que tengan en cuenta las preocupaciones en materia de seguridad de cada país. Otras **medidas concretas** incluidas, relativas al transporte y las comunicaciones, eran la reanudación de los servicios de autobús entre Delhi y Lahore y entre Srinagar y Muzaffarabad, la reanudación de diferentes



El primer ministro indio, Narendra Modi, visita una base de la fuerza aérea en Punjab. Fuente: [Wikimedia Commons](#).

trayectos de tren y la reapertura del espacio aéreo para vuelos comerciales. Además, se incluían propuestas sociales como la ampliación de los intercambios entre estudiantes, periodistas, artistas y empresarios, y el levantamiento de las restricciones a los medios de comunicación y plataformas digitales.

La carta fue firmada por 117 personalidades, 61 procedentes de la India y 56 de Pakistán, entre las que cabe destacar el ex ministro de Exteriores de Pakistán Khurshid Mahmud Kasuri (entre 2002 y 2007), los antiguos ministros jefe de Jammu y Cachemira, Farooq Abdullah y Mehbooba Mufti, el antiguo jefe del servicio de inteligencia indio (Research and Analysis Wing) AS Dulat, así como otros integrantes de los dos Gobiernos, dirigentes políticos e integrantes de la sociedad civil.

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL)

Se incrementa el conflicto en la región indonesia de Papúa Occidental

El centro de investigación [ACLED](#) advirtió a finales de mayo de que el conflicto armado en Papúa Occidental se está agudizando desde principios de 2026, con una frecuencia claramente mayor de los episodios de violencia (el triple desde la llegada al poder del actual presidente Prabowo Subianto, en octubre de 2024) y con una cifra de víctimas mortales al alza mes tras mes. Algunas de las causas del incremento de la letalidad del conflicto y de su creciente impacto sobre la población civil están relacionadas con la intensificación de los ataques aéreos y con drones por parte de las Fuerzas Armadas –mucho más letales que los intercambios de disparos entre las fuerzas estatales indonesias y el Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental (TPNPB)– y por el incremento de los ataques contra población civil por parte de dicho grupo armado. ACLED alertó de que solamente en el mes de mayo se registraron más de 40 víctimas mortales, en su

mayoría civiles. En la misma línea, la organización [Human Rights Monitor](#) señaló que, a finales de junio, más de 123.931 civiles permanecían desplazados internamente en varias regiones –especialmente en las regencias de Puncak e Intan Jaya– debido a las operaciones militares y el conflicto armado. Cabe destacar que en Puncak, las operaciones de seguridad desplazaron a aproximadamente 14.000 personas en los distritos de Kembru, Pogoma y Magebume.

Algunos de los principales hechos de violencia registrados durante los últimos tres meses incluyen un ataque por parte del TPNBB en la región de Korowai (provincia de Alta Papúa), en el que murieron ocho (diez según algunas fuentes) presuntos mineros de oro –acusados por el TPNBB de ser oficiales de inteligencia militar camuflados. Según [ACLED](#), el número de presuntos mineros –que el TPNBB considera que trabajan en labores de contrainsurgencia– asesinados desde 2018 asciende a alrededor de 100. Por otra parte, a principios de julio, el TPNBB reivindicó el [asesinato de un piloto estadounidense](#) de una aerolínea indonesia que aterrizó su avioneta –con siete pasajeros, ilesos– en el distrito de Sobaham (regencia de Yahukimo, provincia de Alta Papúa). El grupo, que también quemó el avión, históricamente ha lanzado serias advertencias y llevado a cabo acciones contra avionetas que sobrevuelan o aterrizan en Papúa, especialmente contra las que considera que colaboran con las Fuerzas Armadas en el transporte de tropas o material. En 2023, por ejemplo, un piloto neozelandés fue capturado por el grupo y librado 592 días más tarde. El TPNBB declaró que el asesinato del piloto estadounidense era un [mensaje](#) a EEUU, Países Bajos y Naciones Unidas por su responsabilidad en la ocupación de Papúa por parte de Indonesia en los años sesenta, sin que el pueblo papú hubiera ejercido su derecho a la autodeterminación. Por otra parte, organizaciones de derechos humanos [denunciaron](#) el incremento de los bombardeos aéreos y de numerosas violaciones de derechos por parte de las Fuerzas Armadas, como la colocación de explosivos sobre los cuerpos de personas asesinadas por las fuerzas indonesias con el objetivo de provocar daños a las personas que se acercaban ellas.

Cabe destacar que a finales de mayo el presidente interino de la organización política Movimiento Unido de Liberación de Papúa Occidental (ULMWP, por sus siglas en inglés), Benny Wenda, criticó las atrocidades cometidas por el Estado indonesio en Papúa Occidental e instó a los líderes del Pacífico a tomar medidas más enérgicas y [aislar a Indonesia en las dos principales organizaciones internacionales del Pacífico](#). Concretamente, Wenda hizo un llamamiento a que se revoque de inmediato el estatus de miembro asociado de Indonesia en el Melanesian Spearhead Group –del que el ULMWP es observador– y el estatus de socio de diálogo en el Foro de las Islas del Pacífico (PIF).

ARMENIA – AZERBAIYÁN: Nuevos pasos en el acercamiento formal entre los dos países

TÜRKIYE (PKK): Incertidumbre en el proceso negociador

ARMENIA – AZERBAIYÁN

Nuevos pasos en el acercamiento formal entre los dos países

Los Gobiernos de Armenia y Azerbaiyán han dado nuevos pasos de acercamiento, en el marco del proceso negociador. A mitad de junio el asesor presidencial azerbaiyano Hikmet Hajiyev se reunió en Armenia con el secretario del Consejo de Seguridad de Armenia, Armen Grigoryan. Se trata de una de las visitas de más alto nivel por parte del Gobierno azerbaiyano a Armenia desde que las partes firmaron en agosto de 2025 una declaración trilateral con EEUU que respaldaba el acuerdo de paz de marzo de ese año (“Acuerdo para el Establecimiento de la Paz y Relaciones Inter-estatales entre la República de Azerbaiyán y la República de Armenia”), pendiente aún de rúbrica. Un [comunicado del Consejo de Seguridad de Armenia](#) señaló que en la reunión los representantes abordaron cuestiones relativas a la agenda de paz entre los dos países. Según el [primer ministro armenio](#), se trataron temas como la demarcación fronteriza y situación de personas detenidas. El encuentro tuvo lugar días después de las elecciones parlamentarias en Armenia, en las que el partido gobernante, Contrato Civil, obtuvo la victoria con el 49,7% de los votos.

Otros pasos en los últimos tres meses incluyen una nueva reunión (la 13ª) de las comisiones de demarcación fronteriza, a finales de abril en Armenia. El encuentro estuvo presidido por los presidentes de las comisiones (el viceprimer ministro de Armenia, Mher Grigoryan, y su homólogo Shahin Mustafayev). Las partes avanzaron en el intercambio de borradores sobre diferentes instrucciones relativas al trabajo de grupos de expertos sobre delimitación fronteriza, a la preparación de un mapa de delimitación de la frontera interestatal y a la formalización y publicación de documentos de delimitación de la frontera. Las partes abordaron también cuestiones relativas a cooperación económica y suministros de bienes, con participación de miembros de los sectores empresariales de los dos países, según [el comunicado del Ministerio de Armenia](#). No obstante, no se informó de involucramiento con otros sectores, como población civil de las áreas fronterizas.

El acercamiento entre los dos países ha incluido también en el último trimestre [acuerdos para el tráfico de internet](#); nuevas autorizaciones para el [tránsito de trigo](#) procedente de Rusia y dirigido a Armenia a través de territorio de Azerbaiyán –que se suma a anteriores suministros de cereales y otros productos, como fertilizante y combustibles–, entre otros. Pese a los pasos recientes, el acuerdo de paz continuaba pendiente de firma, supeditada en gran parte a la exigencia del Gobierno azerbaiyano a Armenia de modificación de su Constitución, al considerar

que contiene aspiraciones territoriales sobre Azerbaiyán. La victoria del partido del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, [no alcanzó la mayoría constitucional](#) requerida para convocar un referéndum, por lo que la situación en ese ámbito seguía siendo incierta. Por otra parte, el Gobierno de Armenia y EEUU firmaron a principios de junio el [acuerdo marco alcanzado en mayo](#) de cooperación relativo al establecimiento de la llamada ruta Trump (TRIPP), que unirá Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través del sur de Armenia, y que tiene forma de acuerdo comercial de creación de una empresa conjunta (TDC) en la que EEUU tendrá el 74% de participación, a través de una entidad comercial, y Armenia el restante 26% durante los primeros 49 años.

En contraste con los pasos en el nivel formal de negociaciones, analistas del [Caucasus Edition: Journal of Conflict Transformation](#) destacaron que la región está en un punto de inflexión en que los arreglos territoriales por sí solos no generan un orden sostenible. Según estos análisis, entre otros elementos, es necesario un reconocimiento del trauma aun presente en las poblaciones en la región y reconducir la conectividad económica hacia una lógica de seguridad humana y que no solamente esté anclada a cálculos geopolíticos. Asimismo, las negociaciones de paz en el nivel formal entre Estados continuaron contrastando con dinámicas de represión contra el espacio cívico en Azerbaiyán. Entre otros pasos, un tribunal sentenció a ocho años de prisión al defensor de derechos humanos Rufat Safarov, en prisión preventiva desde finales de 2024. Según [Human Rights Watch](#) su procesamiento sigue el patrón de cargos penales con motivación política con el fin de silenciar defensores, periodistas independientes, personas opositoras y activistas.

TÜRKIYE (PKK)

Incertidumbre en el proceso negociador

El proceso negociador en torno al conflicto Türkiye-PKK está inmerso desde hace meses en una situación de incertidumbre, especialmente por el retraso por parte del Gobierno en la presentación de una propuesta de ley marco que regule la vía para el retorno y reintegración de los combatientes del PKK. Esta vía legislativa es una de las recomendaciones contenidas en el [informe final](#), aprobado en febrero, de la comisión parlamentaria sobre el proceso negociador. En los meses transcurridos desde el lanzamiento de ese informe, el partido pro-kurdo DEM y el PKK habían reclamado la aprobación de un marco legal holístico y celeridad en su tramitación. En las últimas semanas se incrementó la tensión e incerteza ante el retraso en la presentación de la propuesta de ley a los partidos políticos y la falta de información sobre su contenido.

En relación con el calendario de aprobación, se habían generado expectativas de que la propuesta de ley se presentase inicialmente después del fin del Ramadán (marzo); y, posteriormente, se retrasaron las perspectivas de aprobación a antes del receso parlamentario de verano. A mitad de junio el Parlamento acordó retrasar el inicio de periodo vacacional, previsto inicialmente para el 1 de julio. Al cierre de esta edición (20 de julio), sin embargo, el Gobierno aún no había presentado la propuesta de ley a los partidos. Tras nuevas reuniones a mitad de julio entre la llamada Delegación Imrali (delegación del DEM que desde el inicio del proceso negociador se reúne ocasionalmente con el líder del PKK en prisión, Abdullah Öcalan, y con los partidos políticos) y el partido gobernante AKP, y entre la Delegación y el partido aliado gubernamental MHP, trascendió que la previsión continuaba siendo que la ley se aprobase a finales de julio. A mediados de julio, un alto comandante del PKK, **Duran Kalkan**, advirtió que el PKK no implementaría en la práctica su decisión de desmantelarse si el Gobierno retrasaba la ley marco y si no permite al líder del PKK, Abdullah Öcalan –en prisión desde 1999– liderar el proceso de transición del grupo.

Junto al calendario, otra de las dimensiones que ha generado tensión ha sido la cuestión del contenido de la ley. El PKK ha reclamado que no haya diferenciación de categorías en relación con qué miembros del PKK podrán acogerse a la regulación para el retorno y reintegración, de forma que no excluya a la comandancia y tenga plazos de tiempo suficientemente amplios. Además, el DEM y el movimiento kurdo demandan que la ley regule el futuro estatus de Abdullah Öcalan, actualmente en prisión con cadena perpetua. Por otra, también ha habido tensión en torno a la secuencia del proceso y de esta ley. El **Gobierno ha insistido en estos meses** en que primero debía verificarse un “umbral crítico” de desarme del PKK, antes de cualquier medida legislativa de regulación para el futuro estatus de sus miembros u otros ámbitos. El PKK –transformado en formación política Movimiento por la Libertad del Kurdistan y posteriormente de Movimiento Apoísta– afirmó en un comunicado en mayo que habían

cumplido con todos los compromisos adquiridos y que el Gobierno debía dar pasos concretos con medidas legales y jurídicas. Además, a principios de julio, el **PKK advirtió** que no aceptaría una ley que no defina el estatus de Öcalan. Para el DEM, el desarme del PKK y los pasos legislativos debían darse simultáneamente.

En el último trimestre el proceso ha atravesado momentos de aparente congelación de la iniciativa. Desde la visita a Abdullah Öcalan el **27 de marzo** por la llamada Delegación de Imrali, en la que Öcalan enfatizó la vía de la “integración democrática” para la que reclamó un marco legislativo, las autoridades turcas solo autorizaron otra reunión que tuvo lugar el 24 de mayo. La siguiente visita está prevista para el 23 de julio. Ese amplio lapso de tiempo y la falta de medidas legislativas concretas llevó a líderes del PKK a calificar el proceso como “congelado”, mientras que el Gobierno afirmaba que todo procedía según lo previsto y que buscaban acelerar el desarme. Tras la reunión del 24 de mayo, la delegación (integrada por la parlamentaria Pervin Buldan, el parlamentario Mithat Sancar y el abogado Faik Özgür Erol) emitió **un comunicado** sobre la valoración de Öcalan en el que el dirigente kurdo subrayaba la importancia de una base legal para el proceso, alertaba de los riesgos de prolongar expectativas y de no perder tiempo, y señalaba que una ley marco podía ser la base para un proceso de democratización. Por otra parte, el contexto general en que transcurre el proceso continuó caracterizado por dificultades y retos, incluyendo el incremento de la represión contra el principal partido opositor, el CHP, con la anulación por parte de un tribunal de Ankara del congreso del CHP en que se eligió a su líder, Özgür Özel, y la reinstauración por ese tribunal del anterior líder Kemal Kılıçdaroğlu. Estos hechos se suman a los múltiples encarcelamientos de alcaldes y miembros del partido, así como a la destitución forzada de varias decenas de alcaldes electos y su sustitución por figuras designadas por el Ministerio de Interior –práctica aplicada desde hace años contra alcaldías de partidos prokurdos y, desde 2024, también contra el CHP.



Esta publicación está sujeta a una licencia de Creative Commons. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja la opinión de la ACCD ni de la Generalitat de Catalunya.

ecp escola de
cultura de pau

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

Escola de Cultura de Pau
Edifici B13, Carrer de Vila Puig,
Universitat Autònoma de Barcelona 08193
Bellaterra (España)
Tel: +34 93 581 14 14
pr.conflictes.escolapau@uab.cat
escolapau.uab.cat

Con el apoyo de:



[@escolapau](https://www.escolapau.cat)



[@escolapau.bsky.social](https://twitter.com/escolapau.bsky.social)



[EscolaPau](https://www.facebook.com/EscolaPau)



[escoladeculturadepau](https://www.instagram.com/escoladeculturadepau)

